



PABLO ZEBALLOS: «El tiempo para combatir el crimen organizado puede acabarse»

Especialista en el tema, testigo en terreno de las experiencias vividas por distintas naciones latinoamericanas, advierte la urgencia de comenzar a tratar este problema como un asunto de Estado.

Juan Rauld

Mensaje

⊗ Tras años de investigar en diversos países de América Latina, el investigador y consultor en temas de criminalidad organizada y conflictividad social Pablo Zeballos diagnostica que existen básicamente tres etapas en la instalación y la expansión del crimen organizado en un país. La inicial es la de «intimidación», que se expresa con mucha violencia y con muertes en las calles, muchas veces de desconocidos o de personas a las que simplemente se las identifica como víctimas de «ajustes de cuentas». Una segunda etapa es la de «control de territorio», en la cual la estructura criminal logra asentarse, aunque siempre pueda verse reemplazada por otra similar. La tercera es la de «penetración del tejido social», donde ya ha permeado instituciones y controla, vía corrupción o extorsión, a organismos públicos, incluyendo la policía y la justicia.

¿Cuáles de estas etapas se observan en Chile, actualmente? Esa es una pregunta abierta.

Tras veinte años de desempeño como oficial de Carabineros, Zeballos se dedicó a investigar el tema, por lo cual ya ha cumplido una década trabajando como consultor en instancias de Naciones Unidas y como asesor en gestión de crisis en algunos países. Ha conocido en terreno la realidad latinoamericana. Y ha volcado buena parte de sus conclu-

siones en un libro, *Un virus entre sombras. La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile* (Catalonia, 2024), en el que básicamente advierte que el tiempo para combatirlo se está desperdiciando: «El tiempo para combatir el crimen organizado puede acabarse. Estamos perdiendo el tiempo en discusiones centradas en culparnos los unos a los otros, con división social o con exceso de ideología. Eso es lamentable y nos vamos a arrepentir». Según expresa, con esta publicación busca contribuir a ordenar ideas y ayudar a un consenso «que sirva para abordar esta amenaza, más allá de la sensibilidad del gobierno de turno o de la relación Gobierno-oposición. Es un problema que nos afecta a todos y que debe ser enfrentado como un problema de Estado».

—¿A qué nos estamos enfrentando, exactamente, en Chile?

El crimen organizado siempre ha tenido algún tipo de relación con Chile. Lo que nosotros observamos ahora, que nos provoca un cambio sustancial, es una transformación que se está dando en prácticamente toda la región latinoamericana, con vínculos con estructuras internacionales que han crecido rápidamente—de manera muy evidente tras la pandemia, aunque llevan años de gestación—y a las que interesa sobremedida el control del territorio y la captación de voluntades pública, es decir, la corrupción. Su objetivo es la diversificación de actividades criminales, que no son solamente el narcotráfico, sino también el control de mercados ilícitos en los territorios que explotan. Eso es algo que a países como Chile, Costa Rica, Uruguay o Perú, que no estaban acostumbrados a este fenómeno, está ahora afectando y transformando tradicionales formas de vivir.



«Las organizaciones criminales más grandes de América Latina, las que se han mantenido en el tiempo y las que han alcanzado una expansión territorial importante incluso más allá de su propio país, han surgido de las cárceles».

—En relación a estas situaciones, ¿cuáles son las que se están dando ahora en el país y que a Ud. más le preocupan?

Estamos en una etapa en la que están ocurriendo dos cosas que van a chocar en su momento. Por un lado, tenemos la emergencia de agrupaciones de crimen organizado extranjero. Esto se ha hecho muy visible hoy en Chile. Un caso emblemático es el del Tren de Aragua, aunque hay también muchas otras estructuras y organizaciones. Por otro lado, tenemos la transformación de nuestra propia delincuencia local. Está cambiando. Está pasando de ser una que antes se organizaba en función de clanes o de vínculos familiares —y con ciertos liderazgos de barrios o de zonas— a ser un cierto número de organizaciones más diversificadas, que están buscando también diversificación de acciones criminales. Y esto tiene una lógica. La delincuencia común y la criminalidad organizada siempre tienen que evolucionar, pudiendo sobrevivir quienes tengan mayor capacidad de adaptarse al entorno competitivo.

El modelo exitoso de las estructuras criminales que observamos hoy es esencialmente violento. Hay una violencia muy brutal, desmedida, utilizada de forma simbólica, y hay un reclutamiento temprano, es decir, se incorpora a jóvenes, e incluso a niños, al circuito criminal. Eso es algo nuevo en Chile. Tenemos que entenderlo para dimensionarlo. La forma de enfrentarlo es multidimensional. No se trata solamente de afrontarlo con más policías o más cárceles, o mejorando nuestro sistema penitenciario o modificando nuestras leyes. También es necesario trabajar profundamente en la escolarización, preocuparse de los niños que están fuera del sistema educacional, hablar de estos temas en familia y generar entonces una barrera de una mejor resiliencia social.

—A la vista de lo observado en Chile, ¿efectivamente el crimen organizado ha tenido un crecimiento acelerado?

Sí. Ha tenido un crecimiento rápido, principalmente debido a que el Estado se retrajo en distintos territorios a raíz de las restricciones que impuso la pandemia y, antes, a raíz del estallido social. Pero estos territorios no quedaron abandonados, sino que fueron tomados por el crimen organizado local y transnacional. Este se vinculó en cada lugar con actividades asociadas a economías ilícitas y han visto ahora la oportunidad de diversificar su mercado. Por ejemplo, hoy ya no se trata únicamente de tráfico de drogas, sino del establecimiento de otras lógicas criminales, como la extorsión, por ejemplo, que no solamente se limita a la actividad productiva o comercial. El crimen organizado comienza a tener una resignificación de poder bastante significativa. Se va convirtiendo en una especie de poder paralelo, que tiene la capacidad de negociar con el propio Estado, afectando gravemente la democracia y el Estado de derecho como los conocemos.

—¿Qué actividades se han visto, por ejemplo, a nivel latinoamericano, más usadas para el desarrollo de esas actividades?

En Perú, la minería ilegal del oro ha sido un caso: desplazó en ganancias ilícitas al narcotráfico, en un país productor de coca. La lógica de los años ochenta y noventa de entender el crimen organizado como una especie de cohete con un solo motor de propulsión —que sería el narcotráfico— ha quedado obsoleta. En Perú, pese a haber una alta producción de cocaína, la minería ilegal tiene mayor relevancia como ámbito del crimen organizado. En torno a esa actividad, como también a la minería formal, se desarrollan múltiples mercados ilícitos como, por ejemplo, la actividad extorsiva. Se cobra para que las personas puedan ejercer sus quehaceres: esta vacuna o impuesto, como le llaman, incluye la «seguridad», en vista de que el Estado no está presente. Lo que estamos viendo hoy en América Latina —lo que es más complejo de todo— es que esas extorsiones no se dirigen solo a quienes realizan tareas productivas, sino a cualquier persona que habita en el territorio controlado. Es decir, se cobra por vivir en ese territorio o por tener seguridad dentro de él.

Supresor del Estado

—Por lo anterior, el crimen organizado comienza a ser un supresor del Estado. Hay algunas zonas en México, Ecuador, Perú y también en Chile, en las que, cuando se inició la pandemia, el Estado tuvo una respuesta tardía. Organizaciones criminales fueron entonces las que llegaron primero con apoyo a quienes vivían en esos territorios. Eso genera lógicas no solo de sumisión, sino también de normalización de la presencia criminal en una zona.

—En Chile hay un diagnóstico bastante compartido de que el Estado no está siendo eficiente en una serie de tareas.

Pero es que no es solamente una tarea del Estado. Como sociedad, hemos gastado bastante tiempo en discutir con ideas de trincheras y hemos, entonces, dejado de hacer mucho en algunos territorios. Así, hay sectores donde ni las instituciones estatales ni la Iglesia pueden entrar, porque el narco no deja. No es un tema que pueda adjudicarse a algún gobierno en específico, sino que es una cuestión que se vincula a cómo se entrelazan estas organizaciones con el tejido social y a cómo logran permanecer en el tiempo.

—Ud. ha insistido en que algo clave en la tarea contra el crimen organizado está en el nivel escolar.

Cuando se comprende que la criminalidad organizada busca asentarse en un territorio y perpetuarse en él, se entiende la importancia de proteger a nuestra juventud del influjo del crimen organizado y el reclutamiento temprano. Por ello, es fundamental fortalecer determinadas



«Un virus entre sombras: La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile»

Pablo Zeballos
 Editorial Catalonia, 2024.

políticas públicas para que permanezcan en el tiempo. Ellos, los más jóvenes, son los primeros que el crimen organizado va a querer reclutar para garantizar su permanencia. Y toda esta situación se da en un momento en el que en Chile los índices de no escolarización son, lamentablemente, un récord.

Ahí hay un punto importante.

¿Cómo convencemos, a un niño de 11 años de edad, de que el camino correcto es ir a la escuela que está a un kilómetro de distancia, cuyas salas se llueven y en donde a veces no hay profesor, y que, en cambio, no es correcto quedarse en el barrio observando lo que hace otro joven que entró al circuito criminal y que se viste con zapatillas de 500 mil pesos, tiene auto y anda armado? En ese cuadro, uno observa que esto no es un desafío solamente del Estado, sino que es un desafío social. Así, sería interesante concordar de mejor manera políticas públicas y fortalecer un esfuerzo en común.

En consecuencia, el reto que representan el narcotráfico y el crimen organizado no se soluciona únicamente con más policías o más cárceles, sino con no abandonar materias tan importantes como la educación y el interés cívico.

Sistema carcelario: Motor de expansión

—¿Cuánto y cómo incide la crisis carcelaria actual?

Ese es el motor de expansión del crimen organizado. En los últimos treinta años, las organizaciones criminales más grandes de América Latina, las que se han mantenido en el tiempo y las que han alcanzado una expansión territorial importante más allá de su propio país, han surgido de las cárceles. Esto ha pasado en Brasil, Ecuador y Venezuela; también, en Centroamérica. La pregunta es cuál es el componente común que hace que en realidades penitenciarias de países diferentes se den estas acciones criminales. La respuesta, indudablemente, es una: es la gobernanza criminal de las cárceles. Es decir, cuando las cárceles no están preparadas para restringir la acción de los líderes criminales, estos logran asociarse al interior de los muros del Estado y generar economías muy rentables; se potencian las organizaciones criminales generando un círculo vicioso de reclutamiento constante. ¿Por qué se dan economías tan rentables? Por ejemplo,

«El objetivo del crimen organizado no es principalmente la violencia: cuando logra unificar territorio y tiene una gran presencia, se transforma en el único socio con el cual el Estado puede pactar para bajar los índices de violencia».

el precio de una sustancia ilícita al interior de la cárcel es siete o diez veces más alto que afuera de ella. Es decir, es muy grande el efecto que tiene el hecho de que una organización criminal logre controlar el monopolio de las sustancias ilícitas entre la población penal. Lo mismo ocurre en relación con la venta de teléfonos celulares o el cobro de protección para que no le ocurra nada a quienes están presos: los presos que no están asociados a una estructura criminal pueden también ser víctimas de ella, como también pueden serlo sus familias.

Las cárceles tienen una resignificación en las economías ilícitas y son un motor de creación para muchas de estas organizaciones. Y las cárceles chilenas tienen un serio problema de hacinamiento y se hace necesario discutir cómo queremos estructurar el sistema penitenciario y adecuarlo a las necesidades actuales.

—¿Qué experiencias internacionales es, a su juicio, interesante observar?

Está el modelo italiano de segregación carcelaria. O el colombiano, que integra esfuerzos de las fuerzas armadas y la policía. Hay otros. Sin embargo, cada país tiene una realidad diferente y, así, la mejor fórmula saldrá de una combinación entre la experiencia de la sociedad civil, la academia y las instituciones de Estado. De un intercambio sano de ideas, que sea responsable y sin ideología, saldrán las mejores prácticas para enfrentar esta situación en Chile. Tenemos todavía la oportunidad y el tiempo para intentarlo, pero este avanza rápido.

El gran problema que tenemos hoy es que estamos perdiendo el tiempo en discusiones centradas en culparnos los unos a los otros, o con exceso de ideología. Eso es lamentable y nos vamos a arrepentir. También ocurre que desde el populismo se buscan soluciones mágicas que a veces pueden sonar adecuadas, pero no son realizables.

Controlan y corrompen

—En el libro, Ud. destaca cómo en este problema está en juego una infinidad de variables. ¿Cuál destacaría como esencial?

Una idea central es que el crimen organizado debe ser entendido como un modelo económico que tiene el objetivo de lograr ganancias que vienen de las diversas economías ilícitas, e inyectarlas en la economía formal. El método que observamos actualmente en el crimen organizado en América Latina, que es sumamente violento, es que, una vez que logra su objetivo de permear el tejido social, ya no manifiesta tanta violencia, pues controla el territorio y a estructuras corrompidas. Una de las cosas a resaltar es que el objetivo del crimen organizado no es principalmente la violencia: cuando logra unificar territorio y tiene una gran presencia, en democracias debilitadas o fraccionadas este se puede transformar en el único socio con el cual el Estado puede pactar para bajar los índices de violencia. Eso es dramático.

Está la posibilidad de que, en países donde la democracia es más débil, el crimen organizado penetre de tal forma que se empiece a invisibilizar e instalarse dentro de las propias estructuras del Estado. ¡Eso no es un mito! Ha sucedido en países de América Latina, en las que hay zonas tremendamente complejas —observar México, por ejemplo— o países donde no se pueden realizar elecciones genuinamente democráticas.

Una sociedad más informada

—¿Cuál diría, en ese sentido, que es la primera línea de defensa para una sociedad que enfrenta el crimen organizado?

Esa primera línea está en que su sociedad sea una sociedad más informada. Eso la hace una sociedad más responsable, que sabe que su voto es importante: el ciudadano tiene que estudiar bien por quién vota y debe observar qué es lo que hacen los representantes electos en relación con los recursos públicos. También, ha de estar atento a las políticas públicas que se instauran.

Todo esto involucra preocupación por fortalecer la democracia, instituciones legitimadas y un sistema representativo con importante participación ciudadana, y observatorios ciudadanos del gasto público, que examinen los ingresos, que observen lo que sucede en las cárceles. Todos esos son mecanismos que fortalecen la democracia.

M